



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA LABORAL**

**Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**

**Radicado:** 05001-31-05-019-2022-00399-01  
**Demandante:** MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ  
**Demandadas:** COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.  
**Asunto:** APELACIÓN SENTENCIA - CONSULTA  
**Tema:** INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y la magistrada **ANA MARÍA ZAPATA PEREZ**, dado el impedimento aceptado a doctora **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a emitir sentencia en forma escrita dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, conforme a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

**1. ANTECEDENTES**

**Pretensiones y hechos de la demanda<sup>1</sup>**

El actor busca obtener la declaratoria de ineficacia del traslado que realizó al Régimen de Ahorro Individual y, como consecuencia de ello, tenerlo como afiliado al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad. Aunado a lo anterior, pidió que se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes de su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos.

---

<sup>1</sup> 01PrimeraInstancia. Archivo 02.

Como fundamento expuso que nació el 07 de diciembre de 1960 y que a la fecha de interponer la demanda contaba con 62 años. Su primera afiliación al sistema pensional se dio en el mes de febrero de 1985 a través de su empleador el Departamento de Antioquia.

Que posteriormente encontrándose vinculado con la Administración Postal Nacional en el mes de septiembre de 1996 optó por trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en cabeza de la AFP PROTECCIÓN SA. momento para el cual afirmó no se le brindó información veraz ni oportuna respecto a las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, ni respecto de las consecuencias que generaría dicha decisión.

Conforme a lo anterior, solicitó autorización para regresar al RPMPD, pero obtuvo respuesta desfavorable.

### **Contestaciones de la demanda**

COLPENSIONES<sup>2</sup> aceptó la fecha de nacimiento del acto y la solicitud de retorno al RPMPD, sin embargo, sobre los restante hechos afirmó que no le constaban al ser situación ocurridas ante una entidad diferente.

Se opuso a las pretensiones incoadas puesto que no se demostró que al momento del traslado existiera un vicio en el consentimiento, afirmando que tal acto jurídico se dio de manera voluntaria.

Propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de que Colpensiones decrete la ineficacia del traslado, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, presunción de legalidad de los actos jurídicos, falta de

---

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia Archivo 06.

legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de condena en costas, equilibrio financiero del sistema, prescripción, compensación y declaratoria de otras excepciones.

PROTECCIÓN S.A.<sup>3</sup> Aceptó el traslado efectuado por el demandante a ese fondo de pensiones, aclarando que tal acto se dio después de que se le diera a éste una asesoría clara, completa, comprensible, veraz y profesional la cual se realizó de manera independiente y bajo las condiciones del caso en concreto.

Presentó oposición frente a las pretensiones argumentando que el acto de traslado era existente, válido y se encontraba exento de vicios en el consentimiento, para ello trajo a colación el formulario de traslado de régimen pensional señalando que el mismo es un contrato entre ambas partes, el cual genera derechos y obligaciones a cada uno.

En su defensa formuló las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido los recursos públicos del sistema general de pensiones, innominada o genérica, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

### **Sentencia de primera instancia<sup>4</sup>**

El 05 de julio de 2023 el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín resolvió en una audiencia concentrada lo siguiente:

*“PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ el traslado de los señores IBER MERCADO OSORIO identificado con C.C. 98.527.699, JAVIER FERNANDO URIBE URIBE identificado con C.C. 71.649.063, MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ identificado con C.C. 71.593.447 y CATALINA ESPERANZA COLORADO RÚA, identificada con C.C.*

---

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia. Archivo 07.

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia. Archivos 13-14.

3.493.416, del régimen de prima media con prestación definida RPMPD al de ahorro individual con solidaridad RAIS, y consecuentemente, se DECLARA que, para efectos pensionales, aquellos estuvieron afiliados sin solución de continuidad al primero de los regímenes enunciados.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, ACEPTAR el regreso o vinculación de los señores IBER MERCADO OSORIO, JAVIER FERNANDO URIBE URIBE, MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ y CATALINA ESPERANZA COLORADO RÚA a esa entidad.

TERCERO: ORDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladar los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de los señores IBER MERCADO OSORIO, JAVIER FERNANDO URIBE URIBE, MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ y CATALINA ESPERANZA COLORADO RÚA como cotizaciones obligatorias, rendimientos, gastos de administración y comisiones, sin incluir los valores destinados a pago de seguros previsionales, con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES; y a esta última a recibirlos para que su equivalente en semanas se refleje en las historias laborales.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, las cuales quedan implícitamente resueltas en el contenido de la providencia.

QUINTO: CONDENAR en COSTAS a PROTECCIÓN S.A. en favor de los demandantes, para cuya liquidación se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, para cada uno de los procesos...”.

El juez de instancia tuvo en cuenta el precedente judicial vigente en la materia y señaló que a PROTECCIÓN S.A. le correspondía demostrar el cumplimiento del deber de información antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no se satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, por lo que procede la ineficacia del traslado de régimen pensional.

## 2. RECURSOS DE APELACIÓN

COLPENSIONES.<sup>5</sup> Presentó recurso de apelación de manera parcial basado en el principio de sostenibilidad financiera del sistema, por lo que solicitó que no se omitiera el retorno de todos los valores que reposan dentro de la cuenta de ahorro individual del demandante, al considerar que la orden emanada en primera instancia resultaba

---

<sup>5</sup>01PrimerInstancia.Archivo 13 del expediente digital. Entre 02:26:22 a 2:27:12.

insuficiente al excluirse los conceptos de seguros previsionales y la indexación de las sumas objeto de reintegro.

Igualmente al ser una decisión adversa a los intereses de COLPENSIONES, se debe conocer bajo los lineamientos del Grado Jurisdiccional de Consulta en su favor.

### **3. ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022; las partes presentaron sendos escritos donde reiteran sus argumentos de demanda y apelación.

### **4. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA**

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión que:

- 1) Que el señor MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ nació el día 07 de diciembre de 1960<sup>6</sup>.
- 2) Que de acuerdo a la historia laboral de fecha 03 de agosto de 2022 el señor MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ poseía para ese momento un total de 1661,71 semanas de cotización<sup>7</sup>.
- 3) El actor elevó reclamación administrativa ante COLPENSIONES<sup>8</sup> para obtener el traslado de régimen, la cual fue negada por encontrarse a menos de 10 años para pensionarse.

Estudiada la decisión producto del recurso de apelación presentado por COLPENSIONES e igualmente en el grado jurisdiccional de consulta concedido a favor de esta entidad y al perseguirse dentro de la demanda la ineficacia del traslado de régimen pensional, se debe realizar un análisis de las condiciones que rodearon dicho

---

<sup>6</sup> 01PrimeralInstancia Archivo 02 Pág. 14.

<sup>7</sup> 01PrimeralInstancia Archivo 02 Pág. 15 a 13.

<sup>8</sup> 01PrimeralInstancia Archivo 02 Pág. 33.

acto de movilidad del **RPM** al **RAIS** y verificar si en este existió una indebida asesoría al interesado por parte de la administradora de pensiones privada. De tal manera, si se acredita el desconocimiento de las condiciones pensionales del régimen al cual se trasladaba el actor, por omisión de la información por parte del fondo en cuestión, se debe declarar la ineficacia del acto de traslado y, como consecuencia de ello, la declaración que su afiliación fue sin solución de continuidad en el régimen pensional de procedencia, que en este caso corresponde al de Prima Media.

## **A. LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PENSIONAL DEBE SER LIBRE Y VOLUNTARIA**

Con la creación del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, la finalidad principal fue establecer un sistema uniforme, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral del afiliado, en armonía con la pauta constitucional del artículo 48 en el cual la seguridad social se garantiza a todos los habitantes del territorio nacional en condiciones de igualdad.

La Ley 100 de 1993 incorporó dos regímenes solidarios que coexisten, pero excluyentes entre sí, como lo son el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, a los cuales las personas se pueden afiliar libremente, según la conveniencia que tengan en su caso personal<sup>9</sup>.

En relación con la permanencia mínima del afiliado en el régimen pensional seleccionado, dispone el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, lo siguiente:

*“Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:*

---

<sup>9</sup> Decreto 692 de 1994. Artículo 3. **“Selección de Régimen pensional.** A partir del 1º de abril de 1994, los afiliados al Sistema General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993, podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia, deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:

a) Régimen solidario de prima media con prestación definida;

b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.”

*e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, **estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años**, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado **no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.**”*

Si bien es cierto que dicha norma consagra una prohibición legal, no implica que esta sea total ni absoluta, toda vez que siempre debe analizarse el momento del traslado de régimen pensional, para verificar si fue libre y voluntario, esto es, precedido de una información completa en la que sean explicadas y abordadas las implicaciones que conlleva esa decisión.

El objeto del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es proteger a las personas frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, pues si estos se presentan, comportan la afectación de los ingresos de la persona y/o de su núcleo familiar, y generan una vulneración en los derechos fundamentales del afiliado o beneficiario de forma directa o por conexidad.

Por lo anterior, resulta cardinal la elección del régimen pensional que responda a las necesidades y perfil de cada persona, en lo cual es vital el papel desempeñado por las administradoras de pensiones respecto de la información que suministran de manera previa a la elección, en la gestión y acompañamiento que brinden en el transcurso del trayecto pensional, así como en la fase de la definición de un derecho de esta naturaleza. Por ello, para el interesado, quien en la mayoría de los casos es lego en la materia, es trascendental esa información que suministre la administradora de pensiones en la antesala de la afiliación, pues aquel deposita toda su confianza en la entidad, quien tiene el deber legal de asesorarlo plenamente, como quiera que dicha decisión tiene implicaciones a corto, mediano y largo plazo sobre el futuro pensional.

Todo ello explica la importancia para el afiliado de la elección de régimen pensional, por lo que el acto jurídico de afiliación o de traslado es un asunto crítico y que debe estar revestido de la información suficiente, deber de orden legal que recae en las administradoras de pensiones en virtud de los artículos 20, 48, 53, 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 663 de 1993 y Decreto 720 de 1994<sup>10</sup>.

Del mismo modo el literal b) del artículo 13<sup>11</sup> y 271<sup>12</sup> de la Ley 100 de 1993 prescribe el derecho de todo afiliado al SGP para que la elección de régimen pensional sea libre y voluntaria, la cual sólo se predica cuando el acto fue suficientemente informado, consentimiento que cuando no es perfeccionado, comporta indefectiblemente que el acto no produzca efectos, esto es, que se repute ineficaz.

Ese deber de información se encuentra establecido en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico Financiero), los artículos 4, 14, 15 y 17 del Decreto 656 de 1994, así como en los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994, los que en suma implican para las administradoras de fondos de pensiones la obligación de: i. Estudiar el caso concreto de cada afiliado, ii. Informarle como buen experto y profesional en la materia, las condiciones favorables y desfavorables de la operación que se va a surtir, iii. acompañarlo en todo su trayecto pensional como un buen asesor a su consumidor

---

<sup>10</sup> Decreto 663 de 1993. "Artículo 97. Numeral 1. Texto original. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado." después a través del artículo 23 de la Ley 797 de 2003 mantuvo este deber de información a los usuarios. Y se modificó los siguientes aspectos para profundizar aún más en este deber. El nuevo texto es el siguiente: "Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas.

En tal sentido, no está sujeta a reserva la información correspondiente a los activos y al patrimonio de las entidades vigiladas, sin perjuicio del deber de sigilo que estas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios."

<sup>11</sup> "ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley."

<sup>12</sup> "ARTÍCULO 271. SANCIONES PARA EL EMPLEADOR. El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios."



financiero e, inclusive ha llegado la legislación a exigirles iv. Hacer un estudio comparativo con el régimen del cual proviene y al cual se dirige, es decir, todas estas normas enmarcadas en el deber de orientar al afiliado sobre las disposiciones del SGP y del régimen pensional al cual se aspira pertenecer.

En suma, la elección y traslado de régimen pensional es un asunto significativo en la historia pensional de un afiliado, el deber de prevenir y precaver dichas circunstancias recae sobre el asesor profesional de la AFP, asimilando la asesoría del fondo de pensiones a un consentimiento plenamente informado, de manera que, si no se brinda de forma que le permita definir claramente su expectativa pensional, el mismo no se encuentra perfeccionado.

El asunto también ha sido ampliamente abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha consolidado una línea jurisprudencial desde hace más de quince años, que se mantiene pacífica y lejos de disminuir, en cada pronunciamiento que emite la Corporación se aumenta el grado de protección a los afiliados del SGP (no pensionados).

## **B. PRECEDENTE DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL**

La posición asumida por la Sala de Casación Laboral en torno a los procesos que ha abordado respecto de la nulidad o ineficacia del acto de traslado pensional ha sido unánime en indicar que la falta o la indebida asesoría por parte de las administradoras de pensiones al momento de la elección o traslado, la ineficacia de dicho acto.

Así lo sostuvo desde la sentencia hito -Radicación 31989 de 2008- en la cual señaló que las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la asimetría entre un administrador experto y un afiliado lego. En ese momento, explicaba la Corte que la

consecuencia de tal incumplimiento era la declaratoria de la **nulidad del acto jurídico de traslado**, independientemente del estatus pensional del demandante<sup>13</sup>.

Para el año 2014 varió su postura: si bien reafirmó el criterio asentado en la sentencia de radicación 31989 en cuanto al deber que le asiste a las administradoras de pensiones de suministrar la información suficiente, adecuada y necesaria para este tipo de acto, varió la consecuencia jurídica en tanto el acto no era nulo sino ineficaz<sup>14</sup>.

Desde entonces y con el paso del tiempo esta línea jurisprudencial se ha mantenido pacífica y se han establecido subreglas para la subsunción judicial, en las que claramente se denota la posición que asume el órgano de cierre de esta especialidad en cuanto al respeto a los cánones legales y el derecho a la selección libre y voluntaria que tienen los afiliados al SGP.

### **C. SUBREGLAS DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL**

La referida Corporación ha establecido unas pautas claras para tener en cuenta:

- **VALIDEZ DEL FORMULARIO DE AFILIACIÓN:** el deber de información es ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en un formulario de afiliación resulta insuficiente<sup>15</sup>.
- **ORIGEN DEL DEBER DE INFORMACIÓN:** cada vez involucra un mayor nivel de exigencia a medida que se genera una conciencia de las implicaciones, derechos y deberes que implica la afiliación al sistema general de pensiones, identificando 3 etapas de acuerdo con la normativa vigente que regula y desarrolla este tema<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Ver sentencias Radicación 33083 y 31314 de 2011.

<sup>14</sup> Ver sentencias SL12136-2014, SL9519-2015, SL19447-2017, SL17595-2017 y SL2372-2018.

<sup>15</sup> Ver sentencia SL19447-2017.

<sup>16</sup> Ver sentencias SL1452-2019 y SL1688-2019.

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003  Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009  Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa N.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

- **INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA:** en este tipo de asuntos, la persona alega que no recibió la información debida cuando se afilió, lo cual corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. Tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el afiliado no puede acreditar que no recibió información de manera completa, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en una mejor posición de hacerlo.

Este postulado se compagina con los principios de justicia y buena fe, el cual se concreta en la institución de la carga dinámica de la prueba, en la medida que las administradoras de fondos de pensiones que afirman que sí brindaron una

información suficiente, cuentan también con unas mejores condiciones para demostrarlo<sup>17</sup>.

- **TRASLADOS HORIZONTALES EN EL RAIS:** el hecho de que una persona se haya trasladado varias veces al interior del RAIS no exime a cada administradora de pensiones de brindar la información sobre los efectos y consecuencias de dicho traslado. Por tanto, este es deber de las AFP que se mantiene en el tiempo y no se diluye con traslados horizontales en el mismo régimen<sup>18</sup>.
- **IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN TENDIENTE A DECLARAR LA INEFICACIA DE UN ACTO JURÍDICO:** como los hechos y estados jurídicos no prescriben, a diferencia de los hechos y obligaciones que son consecuencia de esa declaración, estas acciones son imprescriptibles. Por tanto, al declararse la ineficacia de traslado pensional, las implicaciones que genera tal orden tampoco tienen vocación de prescribir, pues precisamente el pronunciamiento judicial busca restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la celebración del acto jurídico<sup>19</sup>.
- **LA INEFICIA DEL ACTO DE TRASLADO SE DECLARA A PESAR DE NO TENER EL AFILIADO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL:** radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada a los afiliados, independientemente de si son o no beneficiarios del régimen de transición, si están próximas a adquirir el status pensional o a cumplir los requisitos para pensionarse; esto debido a que la omisión del deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado<sup>20</sup>.
- **INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO EN SITUACIÓN DE PENSIONADO DEL RAIS:** en el año 2021 se consideró que la calidad de pensionado es una

---

<sup>17</sup> Ver sentencias SL4803-2021 y SL1688-2019.

<sup>18</sup> Ver sentencias SL3349-2021 y SL1008-2021.

<sup>19</sup> Ver sentencias SL1688-2019, SL1689-2019, SL361-2019, SL1421-2019, SL4426-2019, SL4360-2019 y SL 373-2021.

<sup>20</sup> Ver sentencias SL1452-2019, SL 1688-2019, SL1689-2019, SL3463-2019, SL1618-2022, SL2484-2022 y SL932-2023, entre otras.

situación jurídica consolidada, un hecho consumado, el cual no es razonable revertir o retrotraer, pues ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a varias personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y, por tanto, derechos obligaciones e intereses de terceros en todo el sistema pensional. En ese orden, hoy en día, como lo ha aceptado la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, dichas pretensiones son improcedentes por las implicaciones que acarrea tal declaración.

En su lugar, para este tipo de reclamaciones judiciales se dispuso la posibilidad de que la parte demandante pretenda la indemnización total de perjuicios a cargo las AFP involucradas<sup>21</sup>.

- EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DE TRASLADO: acreditada la falta de información por parte del fondo de pensiones, la declaración de ineficacia del acto jurídico del traslado devuelve al afiliado indebidamente trasladado al régimen pensional al que se encontraba inicialmente vinculado, sin que haya lugar a entender que medió solución de continuidad, esto es, que la afiliación al régimen válidamente seleccionado no se entiende interrumpida por el traslado anulado.

La administradora que indujo en error al afiliado para el traslado al régimen de ahorro individual, tiene la obligación de devolver al régimen de prima media el 100% de los aportes efectuados por el afiliado y asumir a su cargo los deterioros que éstos hubieren sufrido.

Es la administradora de pensiones la que debe devolver al sistema la totalidad de los valores que haya recibido en razón de la afiliación, *“como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses”*, como los dispone el artículo 1746 del Código Civil colombiano, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Ver sentencias SL373-2021 y Sala Laboral TSM, del 14 de agosto de 2019, proceso 05001 31 05 007 2015 01295 01.

<sup>22</sup> Ver sentencias SL1688-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2877-2020, SL3871-2021 y SL4803-2021.

La orden de reintegro de valores recibidos incluye los gastos o comisiones de administración<sup>23</sup>, así como los porcentajes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los valores dispuestos para los seguros previsionales con cargo a sus propias utilidades.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, que consagra que los errores, infracciones u omisiones que perjudiquen a los afiliados, serán responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones; será ésta quien deba asumir el deterioro del bien administrado (mermas en el capital, pago de mesadas pensionales y gastos de administración) y deberá regresar todos los valores que hubiere recibido con frutos e intereses.

## 5. CASO CONCRETO

De acuerdo con el análisis realizado, para resolver del recurso de apelación presentados COLPENSIONES, así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta entidad, resulta necesario por parte de la Sala abordar el fundamento de la sentencia de primera instancia al no darse por acreditado que al demandante se le brindó una suficiente asesoría al momento de efectuar el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Destaca la Sala del interrogatorio de parte agotado en la audiencia de trámite y juzgamiento<sup>24</sup> los siguientes puntos relevantes, que tienen incidencia para resolver los asuntos planteados:

1. El accionante indicó que tiene 62 años y actualmente es funcionario público.
2. Frente a las circunstancias en que se dio su traslado a la AFP PROTECCIÓN afirmó que en el mes de septiembre de 1996 trabajaba en la Administración

---

<sup>23</sup> Ver sentencias SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021.

<sup>24</sup> 01PrimerInstancia.Archivo 13 del expediente digital. Entre 59:34 a 1:08:51.

Postal Nacional, y por parte del Ministerio de Telecomunicación enviaron unos asesores de PROTECCIÓN para brindarles información a los trabajadores sobre la eventual desaparición del ISS y que resultaba oportuno que se afiliaran a ese fondo de pensiones.

3. Sostuvo que al momento de su traslado al RAIS no conocía las condiciones o requisitos para acceder a la pensión de vejez.
4. Al ser indagado por los motivos para retornar al RPMPD señaló que por la edad en que se encuentra, al revisar la proyección efectuada por la AFP PROTECCIÓN la eventual mesada que percibiría era muy baja.
5. Señaló en su declaración que no le informaron por parte de PROTECCIÓN que sucedería con las semanas que tenía cotizadas con anterioridad a su vinculación al RAIS, ni le comunicaron de la existencia de un bono pensional.
6. Aceptó que en el año 2012 recibió una reasesoría cuando se encontraba vinculado en la clínica SOMER, y que ese día reunieron a varios funcionarios, aclarando que de manera muy somera una asesora de PROTECCIÓN le dijo que debía firmar el formulario que ella le iba a suministrar porque ya le faltaban más de 10 años para pensionarse.

Una vez analizada esta prueba, para la Sala las afirmaciones realizadas en el interrogatorio de parte no tienen la suficiente fuerza probatoria para constituirse en confesiones provocadas o espontáneas; pues lejos está de afirmarse que la asesoría brindada al momento de trasladarse fue clara, veraz y oportuna; por el contrario, se vislumbra es la escasa o nula información dada por la administradora de pensiones privada.

Sobre este punto, destaca la Sala que no se probó por parte de PROTECCIÓN S.A. que haya realizado una asesoría en debida forma a **MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ** para generar el suficiente conocimiento, claridad y veracidad de las implicaciones del traslado de régimen pensional, como quiera que dicha parte es quien

tiene la carga de la prueba en este tipo de procesos, por encontrarse en una mejor posición para ello y su defensa carece de soporte probatorio.

No puede desligarse la pasiva de esa carga procesal al afirmar que la parte actora suscribió un formulario de afiliación, pues de acuerdo a las subreglas emanadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tal acción no tiene algún tipo de incidencia, toda vez que la falta al deber de información no se convalida en con la suscripción de dicho formulario, ya que la simple rúbrica o autorización en una pre- forma que contiene una leyenda referente al consentimiento, no suple el deber material de instruir de manera efectiva al usuario, de forma tal que se genere un panorama real de las condiciones pensionales que abandona y los requisitos que debe satisfacer para beneficiarse de las ventajas y virtudes del régimen al que ingresa.

En igual sentido, tampoco se presenta una anuencia o convalidación del traslado por la permanencia en el RAIS, ni por haber recibido reasesoría pensional, ni con la recepción de extractos, balances de la cuenta de ahorro individual o el movimiento entre administradoras de este sistema, en tanto se trata de actos que no tienen la capacidad de dotar de eficacia a aquello que nació contrariando las normas de orden público.

Así las cosas, concluye esta corporación que la decisión de traslado entre regímenes realizada por la parte actora, no se fundamentó en una correcta información sobre sus propias condiciones, las derivaciones nocivas que implicaría ese acto jurídico, y en general toda la información eficaz y oportuna relevante para el momento en que se generó el acto jurídico.

Se aclara que pese a que el demandante no tuvo una afiliación directa al Instituto de los Seguros Sociales, se resalta que por remisión expresa del artículo 52 de la Ley 100 de 1993, se entenderá que si hace parte del Régimen de Prima Media con Prestación definida, ya que su traslado se dio para el año 1996 momento para el cual éste se encontraba afiliado a la Administración Postal Nacional por lo que de acuerdo al artículo 17 del decreto 2853 de 2006 para eso momento al Caja de Previsión de



Comunicaciones respondía por las obligaciones de los empleados y trabajadores adscritos a esa entidad.

Todo lo anterior, lleva a la Sala a **CONFIRMAR** la decisión emitida por el A-quo, pues se concluye que en efecto se desconoció por la parte pasiva el deber de información suficiente y veraz que deben cumplir los fondos de pensiones que ofrecen el traslado de régimen; por lo que resulta necesario ante dicho vicio declarar la ineficacia del traslado al RAIS de **MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ**.

En ese punto, debe recordarse que la declaratoria de ineficacia conlleva que el acto jurídico cuestionado no produce efectos; por tanto, no pueden excluirse rubros percibidos por las administradoras privadas producto de la afiliación de la parte actora, con la respectiva corrección monetaria derivada del paso del tiempo, pues sería restarle valor a la decisión, de conformidad a lo expuesto en sentencia **SL-950 de 2022** por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior resulta procedente la modificación de la orden emitida, de conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación formulado por COLPENSIONES.

Lo anterior atiende también al principio de sostenibilidad financiera, pues evita un detrimento patrimonial al fondo público, pues será COLPENSIONES quien reconocerá las eventuales prestaciones a que tenga derecho la parte actora. Por tanto, operará la devolución de la totalidad de recursos captados, al igual que los rendimientos que estos generaron, **más la indexación de los rubros correspondientes a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima**, los cuales se asumen con cargo a los recursos propios de la administradora de pensiones durante el tiempo en que estuvo vigente la afiliación. Por lo tanto, **se MODIFICARÁ la orden impartida por el A quo en el sentido de ordenar el reintegro de las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y la indexación de éste concepto, así como los gastos de administración y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima**.

Al momento de cumplir esta orden los conceptos trasladados deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

## **COSTAS**

Las costas de primera instancia, tal como fueron determinadas por el A-quo. Al salir avante el recurso de apelación presentado por COLPENSIONES no se emite condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

## **RESUELVE**

**Primero: CONFIRMAR** la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 05 de julio de 2023 en cuanto a la declaratoria de ineficacia del traslado realizado por **MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ** al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

**Segundo: MODIFICAR** los numerales segundo y tercero de la sentencia referida, los cuales quedarán así:

- **Segundo: ORDENAR a PROTECCIÓN S.A.** que, en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta providencia, traslade a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual de **MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ** con inclusión del capital, los rendimientos financieros, los gastos de administración, las primas de seguro previsional y los recursos girados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, estos tres últimos conceptos debidamente indexados y con cargo a los recursos de la AFP PROTECCIÓN S.A.

- Al momento de cumplir esta orden los conceptos trasladados deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.
- En consecuencia, se ORDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES recibir estos dineros, reflejarlos como semanas en la historia laboral del demandante y activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

Los Magistrados,

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

*Sin firma por impedimento*  
**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

  
**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

**Radicado:** 05001-31-05-019-2022-00399-01  
**Demandante:** MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ  
**Demandadas:** COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.  
**Decisión:** **CONFIRMA Y ADICIONA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 19 de diciembre de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS  
**SECRETARIO**